



JUZGADO TREINTA Y SEIS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS

CARRERA 28 A # 18 A-67 BLOQUE E PISO 3
Complejo Judicial Paloquemao
J36pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C. seis (06) de octubre del dos mil veintitrés (2023).

1. CUESTIÓN A DECIDIR

Procede el Despacho a resolver en primera instancia, la acción de tutela instaurada por el ciudadano FRAHIN OVIEDO TRUJILLO quien actúa en nombre propio en contra de MI BANCO por la presunta vulneración del derecho fundamental de al debido proceso.

2. ANTECEDENTES

El accionante afirma que ante el Juzgado 30 Civil Municipal de Bogotá D.C. está tramitando un proceso verbal de menor cuantía en contra de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, y que dentro de este el mentado Despacho judicial requirió a la entidad bancaria accionada MI BANCO, a fin de que suministrara una información referente al valor adeudado de un crédito hasta el momento del fallecimiento de su progenitora la señora ROSA TRUJILLO (Q.E.P.D.).

No obstante, informa que ese requerimiento se realizó el 26 de enero de 2023 y que, al no haber la entidad accionada ofrecido una respuesta acorde a lo requerido, fue reiterada la petición el día 28 de julio de 2023 por parte del Juzgado 30 Civil Municipal, sin embargo, señala que a pesar de haber transcurrido todo este tiempo no se ha entregado contestación alguna por parte de la accionada MI BANCO.

En virtud de lo expuesto el accionante manifiesta se está vulnerando su derecho fundamental al debido proceso por parte de la accionada entidad bancaria ya que la información es requerida para dar continuidad a su proceso en curso ante el mentado Despacho judicial.

Es así que a través del presente procedimiento tuitivo solicita le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso y ordenar consecuentemente a la entidad accionada proceda a responder de forma el oficio de requerimiento elevado por el Juzgado 30 Civil Municipal de Bogotá D.C.

3. TRÁMITE PROCESAL

El día veintiséis (26) de septiembre del corriente, la presente acción de tutela le fue asignada por reparto a este Despacho que avocó conocimiento el mismo día y decidió correr traslado de la demanda de tutela y sus anexos a MI BANCO como accionada y al JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ y a la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA como entidades vinculadas de oficio para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción, quienes dieron respuestas en los siguientes términos.

3.1. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

3.2. LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA solicita ser desvinculada dentro del presente al considerar la falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de la entidad, ya que no es la llamada a responder ante las pretensiones del accionante.

De otro lado comenta que, hasta el 03 de octubre de 2023, fue admitida la demanda en su contra, y que tal como consta en el expediente electrónico del proceso se pudo evidenciar que MI BANCO ofreció contestación en los términos requeridos por el Despacho.

3.3. JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. exponen que tal como se observa no hay queja alguna en contra de este Despacho judicial, razón por la cual aducen falta de legitimación en la causa por pasiva.

Comentan con relación a los hechos y pretensiones de la presente que, *“se inadmitió la demanda en auto de 24 de junio de 2022 (archivo 14), con el fin de que informara cuál era el saldo de la obligación garantizada y que se hallaba representada en el pagaré n.º 1086319, para la data del deceso de la asegurada, Rosa Tulia Trujillo, y que eventualmente correspondería al monto que debe asumir la aseguradora, a efecto de determinar la cuantía del proceso. Y, comoquiera que el apoderado actor informó que elevó un derecho de petición a la entidad demandada, pero le fue respondido en forma negativa, dado que, «la información era reservada» (archivo 15), este despacho ordenó oficiar a Mi banco, para que brindara al juzgado esa información.”*

En virtud a la insuficiencia de información aportada por la entidad bancaria, aquí accionada, se reiteró el 26 de septiembre de 2023 el mentado requerimiento y que el día 28 de septiembre hogaño fue allegada la contestación dando cumplimiento a lo requerido por el Despacho.

El Juzgado hace referencia y aporta Link de acceso al expediente virtual.

3.4. MI BANCO en la contestación ofrecida a este Despacho aducen que el accionante no posee vínculo comercial alguno con esta entidad bancaria, y que frente al envío del oficio requerido por el Juzgado 30 Civil Municipal, proceden a emitir contestación el 28 de septiembre de 2023 al correo dispuesto para notificaciones (cmpl30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co).

De otra parte, consideran que en el presente es improcedente la acción de tutela como quiera que no cumple con el requisito mínimo de subsidiariedad, por lo que solicitan sea desestimadas las pretensiones del accionante.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Este Juzgado es competente para conocer de la presente actuación de conformidad con el artículo 86 Superior y Decreto 2591 de 1991, en consonancia con las reglas de reparto expuestas en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017.

la construcción de la verdad procesal es una labor mancomunada de las partes y el juez, debido a que el esclarecimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de unos hechos relatados por el gestor, en las más de las veces ocurre con la confrontación de ellos con el parecer y opinión de quien presuntamente es acusado como agente promotor de la lesión enunciada, además del juicioso análisis y valoración del juez constitucional de esos dichos y los elementos materiales de prueba recaudados en desarrollo de este expediente trámite.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, es necesario traer a colación lo dispuesto en la sentencia SU-961 de 1999: *“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.*

La función de la acción de tutela está claramente definida por el artículo 86 constitucional como procedimiento que no supe a las vías judiciales ordinarias, ya que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo la situación en la cual tiene carácter supletivo momentáneo, que es cuando aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

Ahora bien, evidentemente no es un dato menor que la celeridad sea un rasgo distintivo de este mecanismo, toda vez que la protección y garantía de derechos fundamentales debe

necesariamente tener un carácter apremiante y urgente. Con base en estas breves consideraciones, la doctrina y jurisprudencia¹ han concluido que la inmediatez es una característica inherente a la acción de tutela.

En el sub examine, la accionante cuenta con medios alternativos para dar solución a su pretensión principal y las peticiones expuestas en el libelo tutelar, por cuanto no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que requiera el actuar inmediato del juez constitucional en este evento.

Por ello, la Corte Constitucional ha reconocido como principales características de la acción de tutela², las siguientes:

*“[L]a Constitución Política en su artículo 86 creó la acción de tutela como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales para dotar a las personas de un mecanismo expedito que posee las siguientes características: **Subsidiario, porque sólo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo. Inmediato, debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar. Sencillo, porque no exige conocimientos jurídicos para su ejercicio. Específico, porque se creó como mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales y por último, es Eficaz, porque siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo bien para conceder o bien para negar lo solicitado.** Estas condiciones se concretan en la definición de un trámite preferente y sumario. (Negrillas propias)*

Queda visto cómo desde la interpretación autorizada del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, como también desde un análisis somero de la disposición contentiva a la acción de tutela, tanto la subsidiaridad como la inmediatez ocupan una posición descollante frente a las demás características. Así lo ha expresado la Corte Constitucional, como quiera que sostuviese de tiempo atrás que ambos son los requisitos de procedibilidad para tener en cuenta para la admisión de la acción de tutela³.

¹ Corte Constitucional, Sentencias SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa. No. Radicación: T-229.103 y T-237.605; T-001 de 18 de enero de 2007, M.P: Nilson Pinilla Pinilla. No. Radicación: T-1417365 confróntese con “Tutela y amparo: Derechos protegidos”; OSUNA PATIÑO, NESTOR IVAN. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998. Pág. 72

² Corte Constitucional, Auto 053 de mayo 30 de 2002, M. P: Jaime Córdoba Triviño. No. Radiación: T-561054. Corte Constitucional, Sentencia T-335 de 4 de mayo de 2007, M.P: Nilson Pinilla Pinilla, cuarta consideración jurídica. No. Radicación: T-1505597; además en sentencia SU-813 de octubre 4 de 2007. M.P: Jaime Araujo Rentería. No. Radicación: T-1334615, T-1428285, T-1467563, T-1493961, T-1497113, T-1452784, T-1468624, T-1481167, T-1484384, T-1484400, T-1484421, T-1484422 T-1518046, T-1519609, se explica que el objetivo de estos requisitos es evitar el abuso del derecho por parte de los interesados que acuden a este mecanismo.

³ Ejusdem.

Para comenzar, en apreciación de esta togada es inaceptable que la acción de tutela sea adoptada como vía principal y preferente para la protección y pretensión de dirimir de un asunto cuya naturaleza de la contención está asignada a un trámite especializado.

*“Decía la Corte Constitucional en la sentencia T-903 de 2014, como regla general, que el único objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales. De esta manera, se ha entendido que **el presente mecanismo es improcedente para dirimir conflictos de naturaleza económica que no tengan trascendencia iusfundamental, pues la finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de salvaguarda, más no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y económico, por cuanto para esta clase de contiendas, existen en el ordenamiento jurídico las respectivas acciones y recursos judiciales previstos por fuera de la jurisdicción constitucional.** Los únicos casos en que excepcionalmente la acción de tutela pueda llegar a desatar pretensiones y conflictos de tipo económico o contractual, es porque consecuentemente concurre la defensa de una garantía fundamental, de manera que, para lograr su efectiva protección, el juez de tutela debe definir aquellas controversias”.* (Negrillas propias)

Por ello mucho desde mucho tiempo atrás, el mismo cuerpo colegiado de jueces expresó⁴:

*"Constituye regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción constitucional debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; **por lo tanto, resultan ajenas a la misma las discusiones que surjan respecto del derecho..., cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución.** (...)"* (Negrillas propias)

En la sentencia T-528 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), se señaló también que no le compete al juez constitucional definir derechos litigiosos por vía de amparo, al precisar que: “[Ha] sido clara la jurisprudencia de la Corporación al indicar que los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen la virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aun cuando de estos se predica su carácter legal.

“Por estas razones, la Corte Constitucional ha considerado que el escenario propicio para resolver las diferencias suscitadas con motivo del cumplimiento o incumplimiento de un

⁴ Ver Sentencia T-606 del 26 de mayo de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

contrato o para definir derechos litigiosos de contenido económico, es el de las acciones ordinarias y no así la acción de tutela.

*Por ende, no es suficiente que se alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental para que se legitime automáticamente la procedencia de ese mecanismo constitucional, puesto que la tutela no puede utilizarse arbitrariamente, en especial si los derechos involucrados en la situación jurídica que se analiza, son objeto de debate legal y de contradicciones jurídicas relevantes entre las partes, ya que ello exige la definición y evaluación sobre las cláusulas contractuales y la determinación del alcance de los derechos sustanciales existentes entre ellas. Sobre este punto la Corte ha considerado adicionalmente que **"el alcance del amparo constitucional no puede cobijar la definición de controversias jurídicas legalmente reguladas, como serían las atinentes al reconocimiento de los derechos que se deriven de una relación contractual, pues de un lado, estas controversias cuentan en el ordenamiento jurídico con los mecanismos de solución pertinentes y, del otro, su debate no es propiamente constitucional"**. (Negrillas propias)*

La pretensión del accionante radicó en la inconformidad frente a la contestación que había ofrecido la entidad accionada MI BANCO de cara al requerimiento que le realizó el Juzgado 30 Civil Municipal de Bogotá D.C. al considerarla incompleta y evasiva frente al requerimiento mencionado.

, este no es un tema que pueda ser estudiado o ventilado en esta sede judicial, porque el ordenamiento jurídico ha dispuesto medios judiciales específicos para la solución de este tipo conflictos, ya sea, en la jurisdicción ordinaria según el caso.

Por otro lado, es preciso analizar si la tutela resulta procedente, al menos como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable. El perjuicio irremediable, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, debe ser inminente o actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables, al respecto el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

"[...] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las

particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable⁵.

Con base en lo anterior, considera el Despacho que los hechos descritos por el libelista OVIEDO TRUJILLO de manera alguna constituyen un perjuicio irremediable, como consecuencia apenas natural de que no sea urgente, necesaria, apremiante e impostergable la intervención de este juez de tutela, por ausencia de prueba sumaria que verifique la proximidad temporal de consumación del perjuicio irremediable, las presentes controversias no se pueden ventilar mediante este mecanismo judicial y en cambio debe hacerse a través de la acción especializada dispuesta por el Legislador ante la jurisdicción ordinaria, con lo cual los hechos objeto de análisis no cumplen el requisito de procedibilidad de la subsidiaridad exigible a toda acción de tutela.

Es así que al no contar con prueba que acredite efectivamente un perjuicio irremediable es que no entrara este despacho a realizar un análisis de fondo, pues de lo expuesto no se colige la existencia de un perjuicio irremediable o que dicho acto unilateral hubiese conculcado alguna garantía fundamental de la accionante.

Así las cosas, en consecuencia, no hay razones objetivas para suplantar las vías ordinarias dispensadas por el legislador para dirimir controversias litigiosas, como quiera que no hay fundamentos facticos para que esta togada actué con apremio y conjure la aparente afectación de derechos fundamentales analizada, porque ello sería arrogarse facultades propias de una discusión de naturaleza legal y desconocer el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela.

Por ende, en caso de persistir con las diferencias, ha de acudir a la justicia ordinaria según corresponda debido a que la situación fáctica de origen de este pleito no permite acreditar la configuración de un perjuicio irremediable, porque el daño que se pretende hacer ver, tiende a otro fin que no es debatible en la jurisdicción constitucional.

Dicho sea de paso, con respecto a la pretensión del accionante referente a la ausencia de contestación frente al requerimiento que realizara en su momento el Juzgado 30 Civil Municipal de esta ciudad capital durante el transcurso de este trámite Constitucional fue resuelto mediante respuesta otorgada por la entidad MI BANCO el día 28 de septiembre hogaño, tal como se pudo evidenciar y dar cuenta mediante la respuesta allegada por el

⁵ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.

vinculado despacho y tal como se evidencia en el Expediente virtual que puso a nuestra disposición ese Despacho judicial de manera comedida y dispuesta.

Así las cosas, en mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO TREINTA Y SÉIS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS**, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,


RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el ciudadano FRAHIN OVIEDO TRUJILLO con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes el presente fallo en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ADVERTIR a las partes que en caso de que este proveído no sea impugnado se **REMITIRÁ** el cuaderno original de esta acción constitucional para su eventual revisión, tal cual lo dispone el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NILSA RUÍZ GALICIA
JUEZ

URGENTE: NOTIFICACIÓN FALLO T 2023-0282

Juzgado 36 Penal Municipal Control Garantías - Bogotá - Bogotá D.C.

<j36pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 11/10/2023 8:02

Para: Alexander Portela Buitrago <notificaciones@mibanco.com.co>; dayanna.lozano88k@gmail.com

<dayanna.lozano88k@gmail.com>; Juzgado 30 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.

<cmpl30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificacionesjudicialeslaequidad

<notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

 1 archivos adjuntos (192 KB)

Fallo T 2023- 0282 debido proceso.pdf;

Señores

FRAHIN OVIEDO TRUJILLO

Representante Legal y/o quien haga las veces de:

MI BANCO

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Cordial Saludo.

Comendidamente me dirijo a ustedes con el fin de **NOTIFICARLES** fallo proferido el **06 de OCTUBRE de 2023** dentro de la acción de tutela No **2023-0282**, adjunto al presente en archivo formato PDF copia del mismo.

Se les informa que a partir de la fecha cuentan con tres (3) días hábiles para impugnar la decisión si ha bien lo tienen, **caso en el cual deberán allegar el escrito correspondiente mediante correo electrónico refiriendo como asunto "IMPUGNACION"**.

Atentamente,

MARÍA CRISTINA CASTAÑO MARTÍNEZ

OFICIAL MAYOR

JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.